

BOLETÍN JURISPRUDENCIAL No. 01 ENERO - FEBRERO 2024

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

TABLA DE CONTENIDO

ACCIÓN DE TUTELA

Rad. 41 001 33 33 010 2023 00243 01
Improcedencia de la Acción de Tutela Contra Acto Administrativo / Liquidación Oficial por
Impuesto Predial Unificado [pág. 4](#)

Rad. 41 001 23 33 000 2024 00048 00
Improcedencia de la Acción de Tutela Contra Providencia Judicial / Omisión en el Agotamiento del
Recurso Judicial [pág. 6](#)

Rad. 41 001 33 33 007 2024 00010 01
Sujeto de Especial Protección Constitucional / Concurso de Méritos / Condición de Padre Cabeza
de Familia Acreditada para Hacer Parte del Banco de Instructores del Sena [pág. 8](#)

Rad. 41 001 23 33 000 2024 00070 00
Acción de Tutela por Mora Judicial / Mora Judicial Justificada [pág. 10](#)

HABEAS CORPUS

Rad. 41001233300020240007200
Prolongación de la Privación de la Libertad / Libertad por Cumplimiento Total de la Pena Impuesta [pág. 12](#)

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Rad. 41 001 33 33 009 2023 00337 01
Zonas de Reserva o de Exclusión Para Carreteras / Orden de Acciones Pertinentes para su
Restitución [pág. 14](#)

NULIDAD ELECTORAL

Rad. 41 001 23 33 000 2023 00347 00
Nulidad de Acto de Nombramiento de Secretario General Municipal / Incumplimiento de la
Experiencia Profesional Relacionada Exigida [pág. 16](#)

NULIDAD

Rad. 41 001 23 33 000 2019 00576 00
Convocatoria a Concurso de Méritos no Viciada por Infracción a las Normas en que Debería
Fundarse [pág. 18](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Rad. 41 001 33 33 001 2014 00475 02
Proceso Sancionatorio Ambiental / Competencia Para Adelantar el Proceso por Transportar
Hidrocarburos sin Contar con Plan de Contingencia [pág. 21](#)

Rad. 41 001 33 33 007 2019 00028 01
Configuración del Contrato Realidad / Auxiliar de Enfermería / Imposición de Medidas u Órdenes
por Parte del Establecimiento de Sanidad Militar [pág. 23](#)

Rad. 41 001 33 33 007 2019 00208 01

Muerte en Actos Meritorios del Servicio no Acreditada / Acto Administrativo Definitivo [pág. 25](#)

REPARACIÓN DIRECTA

Rad. 41 001 33 33 001 2016 00056 01

Ataque Contra Miembros de la Fuerza Pública / Desplazamiento sin Autorización y Sin Adoptar las Medidas de Seguridad Requeridas [pág. 27](#)

Rad. 41 001 33 33 008 2017 00288 01

Lesiones Personales por Artículos Pirotécnicos / Ausencia de Falla del Servicio / Incumplimiento de Obligaciones Constitucionales y Legales no Probadas [pág. 29](#)

Rad. 41 001 33 33 004 2015 00282 01

Daño Causado por Obra Pública sin Señalización / Lesiones por Caída / Concurrencia de Culpas [pág. 31](#)

Rad. 41 001 33 33 004 2016 00096 01

Accidente de Tránsito por Hueco en la Vía Pública / Concurrencia de Culpas [pág. 33](#)

Rad. 41 001 33 33 006 2015 00120 03

Responsabilidad Patrimonial del Estado por Pérdida de Oportunidad / Ineficacia en la Atención de Urgencias / Pérdida Anatómica [pág. 35](#)

Rad. 41 001 33 33 004 2014 00629 01

Allanamiento del Bien Inmueble / Configuración de Responsabilidad Patrimonial del Estado por uso de Arma de Dotación Oficial / Inexistencia de la Culpa de la Víctima [pág. 37](#)

Rad. 41 001 33 33 004 2014 00907 01

Daño Causado a Civil con Arma de Dotación Oficial / Lesiones a Guía Durante Operativo Militar [pág. 39](#)



Magistrado Ponente:	Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 010 2023 00243 01
Accionante:	Manuel Alejandro Jiménez Moreno
Accionado:	Municipio de Neiva
Fecha:	26 de enero de 2024

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN OFICIAL POR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala establecer, en los términos de la impugnación, si la acción de tutela resulta procedente para discutir las vigencias fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 incluidas en la Liquidación Oficial por Impuesto Predial Unificado - factura número 2022100000062399 expedida el día 27 de abril de 2022, correspondiente al inmueble ubicado en la Carrera 30 No. 29-71 SUR CONJUNTO RESIDENCIAL SAN TELMO II ETAPA APARTAMENTO 303 TORRE C de Neiva (Huila), identificado con la cédula catastral número 01-06-00-00-0097-0901-9-03-03-0004.

La tesis del tribunal es que se debe revocar la decisión recurrida ante la improcedencia de la acción de tutela por inmediatez y subsidiariedad, en la medida que se están discutiendo las vigencias incluidas en la Liquidación Oficial por Impuesto Predial Unificado del año 2022, la cual es objeto de agotamiento del recurso de reconsideración, que, de no prosperar, conduce a la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Adicionalmente, dicha liquidación oficial constituye título ejecutivo, que contiene una obligación a cargo de contribuyente, que de no ser pagada, conduce a ser ejecutada por el procedimiento de cobro coactivo, donde el contribuyente tiene la oportunidad de proponer las excepciones de mérito que permitan enervar las pretensiones, las cuales, de ser desestimadas, son objeto de demanda ante esta jurisdicción por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al igual que la liquidación que apruebe el crédito.”

Extracto

“Para tramitar las pretensiones del accionante existe, al menos, un mecanismo de defensa judicial eficaz que se dejó caducar negligentemente; y además,

transcurrieron más de 17 meses desde que la administración profirió el acto que el peticionario acusa inconstitucional, hasta la presentación de la tutela, que sería el cobro del impuesto predial unificado vigencias fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 incluidas en la Liquidación Oficial por Impuesto Predial Unificado - factura número 2022100000062399 expedida el día 27 de abril de 2022, correspondiente al inmueble ubicado en la Carrera 30 No. 29-71 SUR CONJUNTO RESIDENCIAL SAN TELMO II ETAPA APARTAMENTO 303 TORRE C de Neiva (Huila), identificado con la cédula catastral número 01- 06-00-00-0097-0901-9-03-03-0004. (...)

Contra los actos administrativos que liquidan o facturan algún tributo, como el impuesto predial, la persona interesada puede presentar ante la Administración el “recurso de reconsideración”, y una vez agotada la vía gubernativa y el acto quede en firme, puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la cual “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho”. (...)

Con todo, el actor podría alegar que aun cuando existían otros medios de defensa judiciales, es necesaria la actuación del juez constitucional para evitar un daño inminente. Sin embargo, la Sala no percibe que eso sea así, porque se advierte que no hizo uso del recurso procedente en la vía administrativa, dejó que adquiriera firmeza la liquidación oficial, al punto que, se le está adelantando el proceso de cobro coactivo, dentro del cual también le asiste el derecho de enervar las pretensiones proponiendo excepciones de mérito contra el mandamiento ejecutivo, al punto que, el acto administrativo que las decida, también es susceptible del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. (...)

De otro lado, la Sala advierte que en el asunto objeto de revisión no se configura un perjuicio irremediable. En este sentido, el accionante no demostró –de hecho, ni siquiera lo alegó– que los actos administrativos cuestionados le ocasionaran un daño grave e inminente que deba ser conjurado mediante acciones urgentes e impostergables. Por ende, no es viable que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio, en la medida en que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Así las cosas, lo procedente es REVOCAR el fallo impugnado adiado 4 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, que protegió el derecho fundamental al debido proceso administrativo del señor Manuel Alejandro Jiménez Moreno, en el sentido de declarar improcedente el amparo solicitado.”

[Sentencia del 26 de enero de 2024, M.P: Gerardo Iván Muñoz Hermida, radicación: 41001333301020230024301](#)



Magistrado Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Primera
Radicación:	41 001 23 33 000 2024 00048 00
Accionante:	Ismael Cujiños
Accionado:	Juzgado Quinto Administrativo de Neiva
Fecha:	08 de febrero de 2024

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / OMISIÓN EN EL AGOTAMIENTO DEL RECURSO JUDICIAL

Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala establecer si resulta procedente la acción de tutela instaurada por el señor Ismael Cujiños contra el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, con ocasión a la declaratoria de caducidad, a través de sentencia del 27 de noviembre de 2023, decisión que no fue recurrida dentro del término de ley.”

Extracto

“Ab initio, resalta la Sala que, en el asunto de autos, no se cumplen con los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela, pues el actor debió agotar todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.

Al respecto, se trae a colación que la Corte Constitucional, ha sido insistente en afirmar que la tutela no puede desplazar a los jueces ordinarios de sus atribuciones, ni reemplazar los procesos ordinarios ni especiales, ni mucho menos, puede ser utilizada para reabrir un asunto litigioso por negligencia, descuido o distracción de las partes.

En el sub lite, se tiene acreditado con las pruebas allegadas al proceso, que ante el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, el accionante interpuso demanda de reparación directa contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, bajo el radicado No. 41001-33-33-005-2020-00039-00, con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 4 de noviembre de 2017; Despacho judicial que, mediante providencia del 27 de noviembre de 2023¹⁸, declaró probada la excepción denominada “caducidad” propuesta por la demandada, en el entendido que la demanda se radicó fuera del término que establece el literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Decisión que no fue recurrida por el señor Ismael Cujiños, a pesar de que era apelable conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 243 CPACA y que el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, la notificó el 28 de noviembre de 2023 a las direcciones electrónicas (ong.losojosdelalma@gmail.com, ago726110@gmail.com), siendo esta última, el correo establecido en el escrito de demanda.

Y como quiera que la parte actora recrimina la inobservancia del fallador al contabilizar el término de caducidad en el proceso, pues presuntamente no tuvo en cuenta la suspensión de términos ocurrida entre los años 2019 y 2020, no es procedente por vía de tutela reabrir un asunto litigioso, frente al cual se contó con la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa.

En consecuencia, la acción de tutela, se torna improcedente, dado que este mecanismo constitucional no puede ser utilizado como una instancia para reabrir etapas procesales, que finalizaron dada la negligencia y descuido reprochable única y exclusivamente al aquí demandante, pues se itera, el accionante no ejerció oposición frente a la sentencia acusada, por tanto, no se cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedencia, en razón a ello, se negará por improcedente la acción de tutela impetrada por el señor Ismael Cujiños.”

[Sentencia del 08 de febrero de 2024, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001-23-33-000-2024-00048-00](#)



Magistrado Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 007 2024 00010 01
Accionante:	Jhon Orlando Urriago Castro
Accionado:	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila
Fecha:	16 de febrero de 2024

SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / CONCURSO DE MÉRITOS / CONDICIÓN DE PADRE CABEZA DE FAMILIA ACREDITADA PARA HACER PARTE DEL BANCO DE INSTRUCTORES DEL SENA

Problema Jurídico

“Como el a quo declaró la improcedencia de la acción al amparo constitucional y el accionante interpuso recurso de impugnación, le corresponde a la Sala determinar ¿si la entidad SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA- le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y el acceso a cargo público al señor JHON ORLANDO URRIAGO CASTRO, por el hecho de no reconocer la calidad de sujeto de especial protección constitucional -padre cabeza de familia- y de esta manera impedirle continuar con la convocatoria que viene adelantando tal entidad para elaborar el Banco de Instructores del SENA 2024?

TESIS DE LA SALA

La Sala revocará la sentencia de primera instancia, pues el SENA vulneró los derechos fundamentales del accionante al debido proceso, al mínimo vital y el acceso a cargo público, al negarle el reconocimiento de la calidad de sujeto de especial protección constitucional como padre cabeza de familia.”

Extracto

“Conforme a los hechos antes descritos y el acervo probatorio relacionado, al subsumirlos dentro del asunto bajo análisis, concluye la Sala que el SENA vulneró al accionante los derechos fundamentales del debido proceso, mínimo vital y acceso a un cargo público, al negar la súplica elevada ante esa entidad en la que buscaba la declaratoria de calidad de sujeto de especial protección constitucional, como padre cabeza de familia, al gravitar dichas negativas sobre una motivación que contraviene en forma arbitraria y caprichosa las exigencias fijadas por la jurisprudencia constitucional, la ley y los mismos presupuestos reglamentarios, estos últimos

establecidos en las circulares emitidas por la propia accionada, en los que claramente se indica que el accionante si tiene la calidad especial alegada. (...)

Bajo los criterios indicados, el SENA, ante la expedición de la circular 3-2023-000229 del 27 de noviembre de 2023, procedió a dar alcance a la cita, mediante la Circular No. 3-2023-000212 del 03 de noviembre del mismo año, dando los lineamientos que se deberían de acogerse para el reconocimiento de las personas en situación especial de ser padres cabeza de familia, en los cuales se fijó por parte del Comité Verificador y Evaluador la competencia de verificar las pruebas allegadas en aras de la probanza de la calidad especial de los sujetos con protección constitucional, el cual debía atender a lo establecido en la jurisprudencia y la ley.

En tal virtud, revisado el acervo probatorio que debía arrimar el señor Urriago Castro ante la accionada, para el reconocimiento buscado, se puede evidenciar que este se limitaba a una serie de documentos que como quedó advertido en el acápite correspondiente, fueron arrimados con las peticiones elevadas ante la entidad, por lo que no cabe duda que el proceder de la demandada al negar lo peticionado, no solo fue omisivo al no valorarlo en la forma debida, sino, violatorio del debido proceso, al no seguir un procedimiento en el que se le garantizara el derecho de defensa y contradicción al aquí accionante.

Con todo, su derecho al mínimo vital se vio violentado igualmente, pues si bien todas las personas son titulares de este, coexisten sectores que, por su reconocido grado de vulnerabilidad, pueden verlo reducido, por lo que, así las cosas, es el Estado el encargado de respaldar a dicho grupo con el fin que este pueda alcanzar el desarrollo pleno en forma autónoma dentro de la misma sociedad. (...)

Por último, considera esta Corporación que con el nugatorio actuar de la entidad accionada, también se encuentra amenazado el derecho al acceso a un cargo público, en el entendido de que si bien aún se está cumpliendo con los requerimientos para ser tenido en cuenta como integrante de la población con estabilidad ocupacional reforzada y con ello, mantenerse como perteneciente del banco de instructores del SENA, también lo es que cuenta con la posibilidad o expectativa legítima de seguir siendo contratado como hasta ahora lo había sido.

De esta manera y a fin de que la entidad demandada tenga claro el trámite que debe seguirse en este caso, será necesario ordenarle que suspenda la ejecución de los oficios 41-9-2023-021581 N.I.S. 2023-01-395886 del 28 de noviembre de 2023 y 41-9-2023-022479 N.I.S. 2023-01-404239 del 07 de diciembre de 2023 y emita nueva decisión conforme a los lineamientos expuestos en la presente decisión.”

[Sentencia del 16 de febrero de 2024, M.P: José Miller Lugo Barrero, radicación: 41001-33-33-007-2024-00010-01](#)



Magistrado Ponente:	Enrique Dussán Cabrera
Instancia:	Primera
Radicación:	41 001 23 33 000 2024 00070 00
Accionante:	Maryuribeth Torres Cuellar
Accionado:	Juzgado Octavo Administrativo de Neiva
Fecha:	29 de febrero de 2024

ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL / MORA JUDICIAL JUSTIFICADA

Problema Jurídico

“Corresponde determinar si el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, vulnera o amenazan vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso, y acceso a la administración de justicia de la señora Maryuribeth Torres Cuellar, al no proferir sentencia anticipada dentro del proceso rad. 410013333008 2020 00154 00, a pesar de haber transcurrido más de 2 años de haber ingresado el proceso al Despacho para sentencia anticipada.

Así mismo se estudiará la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la Registraduría Delegada para el Departamento del Huila.”

Extracto

“Del examen de las actuaciones que se surtieron dentro del proceso ordinario que se cuestiona, esta Corporación advierte que si bien, han transcurrido más de 2 años de la entrada del expediente al despacho para fallo; es claro para esta Corporación que esta mora no es imputable a una falta de diligencia de la Juez; pues no debe perderse de vista, lo manifestado en la contestación de la presente acción, en cuanto a que, además de los turnos que maneja para dictar fallos de sentencia anticipada, tiene procesos ordinarios, ejecutivos; y escriturales. Procesos que antes de haberse asignado el turno, fue necesario que surtieran las etapas correspondientes para cada uno de ellos, lo cual implica más carga para el Despacho.

Lo anterior, sin contar con otras actuaciones como las acciones de tutela, cumplimiento, populares, que tienen prelación sobre los otros procesos ordinarios.

Así mismo se debe precisar que el proceso de la accionante ingresó al Despacho para sentencia en el turno 47 y que en la actualidad se encuentra en el turno 11 de sentencias anticipadas.

Ahora bien, en lo que se refiere a la asignación de turnos de los procesos que entran al Despacho para sentencia, es necesario tener en cuenta el artículo 18 de la ley 446 de 1998 (...)

A pesar que la norma contempla una excepción en los casos de sentencias anticipadas, cabe recordar, lo advertido por la Juez accionada, en cuanto a que, se ha asignado cuadro de turnos especialmente para este tipo de procesos, por lo que no es posible ordenarle que los altere, entre otras cosas porque los impulsos procesales que la parte demandada ha allegado al proceso, no guardan relación con las excepciones establecidas en el artículo 63 A de la ley 270 de 1996, la cuales permiten alterar el orden de los turnos (...)

Lo anterior, no sin antes reconocer que la congestión judicial no puede ser tomada como una justificación para no atender los deberes propios del cargo, de tal suerte que se debe analizar cada caso en particular para determinar si la mora se causó por el alto volumen de trabajo, o por la negligencia del funcionario; encontrando esta Corporación que, no existe ningún elemento de juicio que lleve a concluir que el tiempo que ha tardado el Juzgado en proferir el fallo de primera instancia sea producto de la omisión de la funcionaria en el cumplimiento de sus deberes.

La Sala considera que, en este caso, se configura una mora judicial justificada debido a que, si bien ha tardado un poco más de 2 años en proferir la sentencia anticipada, existe un motivo razonable que justifica dicha demora, como es, el cúmulo de trabajo el cual supera la capacidad que tiene Despacho, para impulsar con celeridad los procesos que tiene a su cargo y decidirlos de manera oportuna.

En esa medida, no existe fundamento para imputarle la tardanza o la omisión en el cumplimiento de las funciones a la autoridad judicial accionada, de tal suerte que, a la luz del precedente constitucional, no existe vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Maryuribeth Torres Cuellar.”

[Sentencia del 29 de febrero de 2024, M.P: Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41 001 23 33 000 2024 00070 00](#)



Magistrado Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Única
Radicación:	41001233300020240007200
Accionante:	Pedro Luis Roncancio Pedreros
Accionado:	Juzgado 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva y Otros
Fecha:	20 de febrero de 2024

PROLONGACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / LIBERTAD POR CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA PENA IMPUESTA

Problema Jurídico

“Se plantea al Tribunal decidir: ¿Se ha prolongado de manera indebida la privación de la libertad del señor Pedro Luis Roncancio Pedreros, al no haber dado el EPMSC de Neiva, trámite a la boleta de libertad No. 004 del 15 de febrero de 2024?

La tesis del despacho es que se ha prolongado de manera indebida la privación de la libertad del citado señor y se accederá al amparo de habeas corpus, pues se demostró que el demandante continúa privado de su libertad, pese a que ya cumplió la pena que le fuera impuesta y así lo decidió la autoridad competente.”

Extracto

“El señor Pedro Luis Roncancio Pedreros fue condenado el mayo 22 de 2018 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Neiva a la pena privativa de la libertad de 102 meses de prisión (8 años y 6 meses) y 3000 smlmv de multa (f. 5 a 30, cuaderno 1, expediente J6EPMS), por ser coautor del delito de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión y hurto calificado agravado en concurso homogéneo.

El día 9 de febrero de 2024 (archivo 0485, Id.), el director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Neiva le comunicó al Juzgado 6 de EPMS que el señor Roncancio Pedreros cumplió con la totalidad de la pena impuesta, habiendo cumplido 102 meses y 14 días (76 meses y 10 días de tiempo físico y 26 meses y 4 días de redención de pena), a lo cual dio lugar mediante auto del 15 de febrero de 2024 (archivo 488, Exp. J6EPMS) cuando el juzgado redimió 2 meses y 11 días de la pena impuesta al actor y le concedió la libertad por cumplimiento total de la pena impuesta, ordenando librar de forma inmediata la boleta de libertad ante la Dirección del EPMSC de Neiva.

Así, a las 4:37 pm del 15 de febrero de 2024 (archivo 0494, Id.), el Juzgado remitió el auto que antecede y la boleta de libertad No. 04 de la misma fecha, al director del EPCMS de Neiva, ordenando dejar en libertad al interno Pedro Luis Roncancio Pedreros, advirtiéndole que, si era requerido por otra autoridad judicial, debía dejarlo a su disposición.

En esa medida, es claro que se le otorgó la libertad al señor Roncancio Pedreros desde el 15 de febrero de 2024 y continúa privado de la libertad, pese a la decisión judicial mencionada y haber sido comunicada en debida forma a quien tiene la facultad de hacerla efectiva, sin que así lo hubiere hecho y por ello, lo requirió mediante auto del 19 del mismo mes y año (Archivo 5, Samai) para que atendiera lo ordenado y le diera respuesta a la presente acción constitucional e informara al despacho la situación del internamiento del actor, siendo notificado a las 4:42 pm (archivo 6, Id.) y guardó silencio.

A esta hora no se ha obtenido respuesta por parte del director del EPMSC de Neiva y no se tiene certeza de que haya atendido la boleta de libertad 04 del 15 de febrero de 2024 del demandante, prologando de manera indebida la privación de la libertad del mismo, por lo cual se dispondrá que se le dé la libertad inmediata a menos que el señor Pedro Luis Roncancio Pedreros se encuentre requerido por otra autoridad judicial, pues en ese caso deberá ser dejado a su disposición.”

[Sentencia del 20 de febrero de 2024, M.P. Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001233300020240007200](#)



Magistrada Ponente:	Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 009 2023 00337 01
Accionante:	Silvia Araujo Cuevas y Mario Arias Barrera
Accionado:	Municipio de Yaguará - Huila
Fecha:	15 de febrero de 2024

ZONAS DE RESERVA O DE EXCLUSIÓN PARA CARRETERAS / ORDEN DE ACCIONES PERTINENTES PARA SU RESTITUCIÓN

Problema Jurídico

“Corresponde a ésta Corporación establecer si el MUNICIPIO DE YAGUARÁ – HUILA, incumple la norma contenida en el inciso segundo del artículo 4 de la Ley 1228 del 16 de julio de 2008 “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”, y en tal sentido ORDENARSE el inicio de las acciones pertinentes para la restitución de la zona verde, berma o de protección sobre la vía que desde el casco urbano de Yaguará (H) conduce hacia el municipio de Teruel (H), más exactamente en la vereda Flandes, contiguo al Cementerio Municipal de Yaguará (H), con Código 46HLo4, vía de segundo orden a cargo del Departamento del Huila.”

Extracto

“En ese orden de ideas, se evidencia un incumplimiento por parte de la Alcaldía del Municipio de Yaguará que ha perdurado por muchos años, ante la negativa a iniciar las acciones respectivas para recuperar la faja de terreno o zona de protección o exclusión de la vía denominada Ramal a Yaguará, identificada con el Código 43HLo4, que ha sido invadida con la construcción de viviendas, pese a las constantes quejas y requerimientos efectuados por los aquí accionantes, a las conciliaciones fallidas con los habitantes invasores y al requerimiento efectuado por la Gobernación del Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Vías en Infraestructura.

Persistiendo la Alcaldía Municipal a través de la Dirección de Justicia Municipal en hacer requerimientos previos al inicio del proceso policivo respectivo, cuando los mismos se deben de hacer al interior del proceso policivo en el cual se contempla una etapa probatoria, en la cual el quejoso o el presunto infractor podrán solicitar la práctica de pruebas pertinentes y conducentes, y así mismo, la autoridad podrá decretar pruebas de oficio, garantizándose así el derecho de defensa y contradicción.

Por último, manifiesta el apoderado que, para dar inicio al proceso de recuperación respectiva del espacio público, se debe contar con presupuesto para la reubicación de las familias que residen en las viviendas construidas en la faja de terreno o zona de protección o exclusión de la vía denominada Ramal a Yaguará, identificada con el Código 43HLo4, argumento este que resulta reprochable como quiera que en primer lugar la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" en su artículo 223 establece que la acción de Policía puede iniciarse de oficio o a petición de la persona que tenga interés en la aplicación del régimen de Policía, contra el presunto infractor. Sin que en ninguno de sus artículos establezca la necesidad de contar con recursos económicos previos a iniciar un proceso policivo como el de la restitución de bien de uso público.

En segundo lugar, el artículo 4 de la Ley 1228 de 2008 modificado por el artículo 17 de Ley 1882 del 15 de enero de 2018 establece que no es procedente indemnización, compensación o reconocimiento alguno por las mejoras levantadas en las fajas o zonas reservadas a que se refiere la Ley 1228 de 2008. (...)

Y, por último, la sala considera equívoco el argumento que para dar inicio al proceso policivo sea requisito previo el contar con los recursos para la reubicación de las familias, por cuanto durante el desarrollo del proceso pueden suceder muchas situaciones, incluso que los habitantes que han invadido con sus viviendas la faja de terreno o zona de protección o exclusión de la vía denominada Ramal a Yaguará, identificada con el Código 43HLo4, abandonen de manera voluntaria dicha invasión, y sumado a ello, al contar con una decisión definitiva del proceso policivo de restitución del espacio público, esta servirá de fundamento para conseguir los recursos necesarios para su debido cumplimiento.

Así las cosas, los anteriores argumentos conducen a la Sala a confirmar el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de cumplimiento, resultando necesario únicamente modificar el término concedido para la culminación del proceso policivo de restitución de bien de uso público, ampliando el término a un (1) año, como quiera que se trata de varios infractores, por cuanto son varias las viviendas que se han construido desde el año 2014 hasta la fecha ocupando la faja de terreno o zona de protección o exclusión de la vía denominada Ramal a Yaguará, identificada con el Código 43HLo4."

[Sentencia del 15 de febrero de 2024, M.P: Gerardo Iván Muñoz Hermida, radicación: 41 001 33 33 009 2023 00337 01](#)



Magistrado Ponente:	Ramiro Aponte Pino
Instancia:	Única
Radicación:	41 001 23 33 000 2023 00347 00
Demandante:	Jan Marco Cortés Guzmán
Demandado:	Juan Nicolás Zambrano Torres
Fecha:	29 de febrero de 2024

NULIDAD DE ACTO DE NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL / INCUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA EXIGIDA / PROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INAPLICABLE POR DECAIMIENTO

Problema Jurídico

“El asunto sub examine se contrae a establecer si el señor Juan Nicolás Zambrano Torres, quien por conducto del decreto 92 de 2023 fue designado secretario general y de gobierno de Timaná (nivel directivo, código 020, grado 08), satisfacía los requisitos establecidos para acceder a dicha dignidad. Es decir, los presupuestos consagrados en el decreto 070 de 2023, modificado por el Decreto 90 de 2023. En especial, el tiempo de experiencia profesional relacionada (15 meses).”

Extracto

a.- Como ya se indicara, en la hoja de vida del señor Zambrano Torres reposan dos certificaciones: i) una expedida por el propietario del establecimiento Frigo Carnes Max Pollo del municipio de Timaná, y ii) otra suscrita por el representante legal de Casa Tecnológica Pitalito. Sin embargo, las mismas no satisfacen los requerimientos para probar la experiencia relacionada. En la primera brillan por su ausencia los extremos temporales y no se consignaron las funciones específicas que realizó. Y en la segunda, tampoco se precisan las labores concretas que desplegó, porque escuetamente se consignó que fueron “actividades de COORDINACIÓN DE PERSONAL Y LOGÍSTICA”.

b.- En el formato único de hoja de vida que aportó el ente territorial, se afirma que terminó materias de pregrado en diciembre de 2020, pero brilla por su ausencia un certificado o un medio de convicción que corrobore tal aserto. Y en razón a que el título de ingeniero industrial fue obtenido el 1º de octubre de 2021; los contratos de prestación de servicios celebrados antes de dicha calenda (entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2021) no se pueden tener en cuenta para acreditar la experiencia exigida.

c.- Efectuada la anterior precisión, se procederá a verificar la experiencia que acreditaba en la fecha del nombramiento (19 de septiembre de 2023); tomando como referente los contratos que celebró con la ESE San Antonio de Timaná (entre el 1º de octubre de 2021 y el 18 de septiembre de 2023:

i).-En principio, la temporalidad se cumple; porque para desempeñar ese empleo se requieren 15 meses de experiencia profesional relacionada, y al sumar el plazo de los mismos, se obtienen 22 meses y 18 días.

ii).- Ahora bien, no ocurre lo mismo con la naturaleza de las funciones o actividades desempeñadas, porque se circunscribían a “prestar sus servicios de apoyo a la gestión como AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO”. Labores propias del nivel asistencial⁸, pues se limitaban a elaborar cheques, boletines diarios de caja y bancos; ordenar y clasificar comprobantes y libros de contabilidad; elaborar certificados de retención en la fuente, IVA e ICA; participar en la identificación de costos de cada uno de los servicios. Es decir, no guardan similitud o correspondencia con las funciones encomendadas al secretario general y de gobierno. Que corresponde al nivel directivo, y entraña responsabilidades de alta gerencia en la administración municipal: (...)

d.- En ese orden de ideas, es menester colegir que el señor Juan Nicolás Zambrano Torres no satisfacía la experiencia profesional relacionada que se exigía para ser designado a la dignidad de secretario general y de gobierno; en tal virtud, el acto de nombramiento (Decreto 92 del 19 de septiembre de 2023) infringió la norma en que debía fundarse, y en armonía con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 137 y en el artículo 275-5º del CPCA¹⁰, impone declarar su nulidad.

e.- En lo relacionado con el argumento esbozado por el demandado al alegar de conclusión; quien considera que el acto enjuiciado perdió fuerza ejecutoria, porque después de que él renunció se nombró un nuevo secretario general y de gobierno; es pertinente recordar, que aunque se haya presentado el decaimiento del acto (porque desaparecieron los fundamentos de hecho o derecho), sigue siendo pasible del control de legalidad (para verificar si acató las normas a la que estaba obligado); siendo del caso recordar, que el juicio de nulidad es diferente a la ejecutoriedad (cumplimiento de la obligación en él implícita).”

[Sentencia del 29 de febrero de 2024, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41 001 23 33 000 2023 00347 00](#)



Magistrado Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Primera
Radicación:	41001-23-33-000-2019-00576-00
Demandante:	Oscar Huber Zúñiga Córdoba
Demandado:	Departamento del Huila – Asamblea Departamental
Fecha:	13 de febrero de 2024

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS NO VICIADA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS EN QUE DEBERÍA FUNDARSE

Problema Jurídico

“De conformidad con la fijación del litigio efectuada en audiencia inicial del 26 de enero de 2022¹⁶, el presente asunto se centra en determinar si los actos administrativos contenidos en (i) la Resolución N° 033 del 17 de julio de 2019, a través del cual se convoca a la elección del Contralor Departamental del Huila para el periodo 2020-2023, (ii) la Resolución N° 076 de 2019, mediante la cual se realizan ajustes al proceso de convocatoria, (iii) la Resolución N° 078 de 2019, que modifica parcialmente la Resolución N° 076 de 2019, todas ellas expedidas por la Asamblea Departamental del Huila, y en (iv) el Oficio del 16 de diciembre de 2019, suscrito por el Presidente de la Asamblea Departamental del Huila; se encuentran viciados de nulidad por infracción a las normas en que deberían fundarse, por presuntamente (i) no haberse adelantado la convocatoria a través de una institución de educación superior, (ii) haberse trasgredido el principio de publicidad, y (iii) haberse vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la información y petición.”

Extracto

“Naturaleza del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano IDEXUD: (...)

A juicio del demandante, el IDEXUD carece de la capacidad, aptitud e idoneidad requeridas para desarrollar la convocatoria para la elección del Contralor Departamental del Huila para el periodo 2020-2023; estimando que es una entidad descentralizada con personería jurídica propia, pero no es una institución de educación superior con acreditación de alta calidad, como lo exige el artículo 5° de la Ley 1904 de 2019. (...)

Al margen de ello, dada la naturaleza jurídica del IDEXUD, estudiada en el acápite precedente, se advierte que se trata de una dependencia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, creada por el Consejo Superior Universitario; por intermedio de la cual, la institución de educación superior gestiona los programas especiales de extensión, asesoría y consultoría, entre otros. Encontrándose su director debidamente facultado por el organismo universitario, para el ordenamiento del gasto y la suscripción de contratos.

De ahí que, carezcan de sustento las afirmaciones de la demanda, relativas a que el IDEXUD es una entidad descentralizada con personería jurídica propia en la medida que no está así determinado en los estatutos del ente universitario.

Por el contrario, tal y como lo señala la Procuradora 34 Judicial II delegada ante esta Corporación, el IDEXUD hace parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Dicha institución de educación superior, para la data de los hechos, contaba con la Acreditación Institucional de Alta Calidad concedida por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución N° 23096 del 15 de diciembre de 2016, por el término de cuatro (4) años; la cual fue renovada por conducto de la Resolución N° 023653 del 10 de diciembre de 2021, por otros ocho (8) años.

En ese sentido, la Sala no advierte infracción alguna al artículo 5° de la Ley 1904 de 2018; por lo que es impróspero este cargo de nulidad. (...)

Principio de publicidad en el marco de la convocatoria para la elección del Contralor Departamental del Huila para el periodo 2020-2023: (...)

Partiendo de ello, si bien durante el proceso de elección de Contralor debe garantizarse el principio de publicidad, ninguna de las normas rectoras de dicha elección, imponen que deba indicarse expresamente el medio de difusión ni las características del anuncio, como lo echa de menos el demandante.

Para la Sala, basta con que, además de las fechas indicadas en el cronograma, se haya satisfecho el requisito de “periódico de circulación regional”, contenido en la Resolución N° 033 de 2019; como quedó previamente acreditado respecto del Diario La Nación.

Ello, sumado a que dichas publicaciones cumplieron su cometido⁵¹, aspecto que se comparte con el Ministerio Público; pues, los resultados de la etapa de inscripciones dan cuenta de que el inicio de la convocatoria fue de conocimiento público y para nada sorpresivo entre los administrados. Tanto así que, conforme al Acta de Cierre

de Recepción de Hojas de Vida, elevada el 9 de agosto de 2019, se inscribieron 73 personas.

De modo que, a juicio de esta Corporación, no se infringió en manera alguna el principio de publicidad ni el artículo 6° de la Ley 1904 de 2018, en los términos alegados por el actor.

Derechos al debido proceso, acceso a la información y petición, en la convocatoria para la elección del Contralor Departamental del Huila para el periodo 2020-2023: (...)

Como se analizó en precedencia, y contrario a lo afirmado en la demanda, la prueba escrita en los procesos de selección sí goza de reserva legal, contenida en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004; siendo esta una limitación legítima a su acceso. Sin embargo, dicha limitación no es absoluta, en la medida que está excepcionalmente permitida para quienes formulen reclamaciones contra la prueba, como el caso del señor Zúñiga Córdoba.

Fue justamente por ello que la entidad lo citó a la diligencia de exhibición documental, y le puso de presente los documentos por él solicitados. Sin embargo, coincide esta Sala en lo conceptuado por el Ministerio Público, y es que fue el hoy demandante, quien no quiso acceder a dicha información por no realizarse bajo sus condiciones; pese a que previo a la diligencia, se le había enviado el protocolo a seguir, con instrucciones precisas del procedimiento, las prohibiciones y la confidencialidad de la prueba⁶⁶.

Así pues, las circunstancias alegadas por el actor, en primer lugar, no fueron debidamente acreditadas; y, de otro lado, no se advierte que constituyan vulneración alguna a sus derechos fundamentales al debido proceso, petición y acceso a la información.

De manera que, ante la no prosperidad de los cargos de nulidad formulados contra los actos enjuiciados, para la Sala resulta forzoso negar las pretensiones de la demanda; en la medida que no fue desvirtuada su legalidad.”

[Sentencia del 13 de febrero de 2024, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001-23-33-000-2019-00576-00](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



Magistrado Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001333300120140047502
Demandante:	Coltanques S.A.
Demandado:	Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena –CAM
Fecha:	30 de enero de 2024

PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL / COMPETENCIA PARA ADELANTAR EL PROCESO POR TRANSPORTAR HIDROCARBUROS SIN CONTAR CON PLAN DE CONTINGENCIA

Problema Jurídico

“¿Debe revocarse la sentencia recurrida, como quiera que la CAM no era la autoridad ambiental competente para adelantar el proceso sancionatorio ambiental contra la sociedad demandante por transportar hidrocarburos en jurisdicción del departamento del Huila sin contar con el plan de contingencia y, por ende, los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad?

La tesis del Tribunal es que debe confirmarse la sentencia recurrida, pues la CAM sí contaba con competencia para adelantar el proceso sancionatorio ambiental contra la sociedad demandante por transportar hidrocarburos en la jurisdicción del departamento del Huila sin contar con el plan de contingencia aprobado por la autoridad ambiental donde realizó el cargue.”

Extracto

“Una vez surtidas todas las etapas procesales, la autoridad territorial puso fin al procedimiento sancionatorio ambiental, declarando responsable a la demandante en condición de infractor de la normatividad ambiental vigente y expidió la Resolución No. 0025 de 13 de enero de 2014 (f. 32 a 42 C. Ppal # 1) considerando que el 14 de junio de 2012 transportaba hidrocarburos sin el correspondiente plan de contingencia, la cual fue recurrida por la demandante (f. 256 a 264 C. Ppal # 2) y resuelta por la demandada con Resolución No. 0404 del 12 de marzo de 2014, confirmando, en todas sus partes la Resolución recurrida (f. 41 a 48 C. Ppal # 1).

Está demostrado y así lo aceptó la demandada, que la competencia para aprobar el plan de contingencia para el transporte de hidrocarburos es de la autoridad ambiental donde se cargue dicho combustible y para el caso en concreto era CORPOAMAZONÍA" (f. 94 a 110 C. Ppal # 1).

Sin embargo, también es claro que, ello no la hace competente para conocer de las infracciones ambientales que se causen en otras jurisdicciones como consecuencia de las actuaciones desplegadas por los agentes o las empresas autorizadas para transportar los compuestos y menos si se tiene en cuenta que al momento de la ocurrencia de los hechos no existía la aprobación del plan o permiso requerido y por haber sucedido en jurisdicción del departamento del Huila, era de competencia de la CAM, adelantar el proceso administrativo que se cuestiona.

Se probó que la demandante había solicitado la aprobación del plan de contingencia, pero decidió transportar el material sin estar autorizada para ello, siendo evidente que transgredió la norma y al hacerlo en jurisdicción del departamento del Huila, originó que la competencia para investigar la falta, la asumiera la demandada y por consiguiente luego de adelantadas las actuaciones administrativas en donde se le respetó el debido proceso, conllevaron a la aplicación de la sanción impuesta en la resolución demandada. (...)

Hasta este punto, para la Sala es claro que la competencia por el factor territorial (el lugar donde se produjo la infracción de la norma ambiental) y la naturaleza de la infracción (infracción de la norma ambiental que exige el plan de contingencia debidamente aprobado para el transporte terrestre de hidrocarburos) señalan que radica en la CAM, como se señaló en el acápite 3.4. de competencia.

Por lo anotado no encuentra la Sala que los actos administrativos demandados estén vulnerando las normas que se citaron como violadas, de ahí que habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda, pues se reitera, la empresa transportadora decidió transportar los productos nocivos que requerían del plan de contingencia aprobado, sin contar con el mismo y ello constituye la falta que en dichos actos se sancionó."

[Sentencia del 30 de enero de 2024, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001333300120140047502](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



Magistrada Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 007 2019 00028 01
Demandante:	Lorena Andrea Pérez Hernández
Demandado:	Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad Militar
Fecha:	13 de febrero de 2024

CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO REALIDAD / AUXILIAR DE ENFERMERÍA / IMPOSICIÓN DE MEDIDAS U ÓRDENES POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

Problema Jurídico

“Dada la decisión del a quo que negó las pretensiones y que la parte actora recurre tal decisión insistiendo en las mismas, la Sala debe determinar ¿si existió una relación laboral de carácter continua o discontinua entre la demandante Lorena Andrea Pérez Hernández, como auxiliar de enfermería, y la DIRECCIÓN DE SANIDAD MIITAR – BATALLÓN DE ASPEC – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5176 DE NEIVA, desde el 28 de agosto de 2007 al 15 de diciembre de 2016 y si como consecuencia, establecer si están afectados de nulidad por violación de normas superiores, los oficios Nos. 20186491749941 del 14 de septiembre de 2018 y 2018649888861 del 2 de octubre de 2018, expedidos por tal entidad, por medio de los cuales le negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a la demandante, al no existir dicha relación laboral?

TESIS DE LA SALA

La Sala revocará la sentencia de primera instancia y se accederá parcialmente a las pretensiones, por cuanto se demostró que la señora Lorena Andrea Pérez Hernández prestó sus servicios personales en el Establecimiento de Sanidad Militar No. 5176 de Neiva como Auxiliar de Enfermería 28 de agosto de 2007 al 15 de diciembre de 2016, periodo en el cual recibió una remuneración y sin que fueran ejecutadas en forma autónoma e independiente sino de manera subordinada y con sujeción a las órdenes y controles de sus superiores, en tanto se trata de actividades estrechamente relacionadas con la función misional de la entidad como lo es la prestación de los servicios de salud.”

Extracto

“Es decir, se debían ejercer las precisas órdenes de los médicos tratantes y de las enfermeras jefe o de la Coordinadora. Así las cosas, las labores que ejercía la señora Lorena Andrea Pérez Hernández no podían desarrollarse de manera autónoma, sino que, atendiendo a la naturaleza de la actividad de la medicina y el manejo directo de pacientes que le eran encomendados, debían limitarse a las precisas instrucciones impartidas por los médicos o la Coordinadora. En suma, no tenía autonomía técnica ni administrativa en su relación contractual.

Por otra parte, la Sala resalta que la misión del Establecimiento de Sanidad Militar No. 5176 de Neiva, es la prestación de los servicios médicos a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, lo cual, sin duda, tiene relación directa con las labores desempeñadas por la demandante como Auxiliar de Enfermería, por lo tanto, las funciones asignadas a la actora se compasan con aquellas que debía prestar los funcionarios de planta de la entidad, sin las cuales no podría cubrir con la función misional que presta.

En ese orden, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, habida cuenta de que el desempeño de las funciones por parte de la actora estaba sujeto a la imposición de medidas y/o órdenes por parte del Establecimiento de Sanidad Militar, tales como: el imposición de horarios o turnos, prácticamente inmodificables debido al funcionamiento de la institución, la imposibilidad de la prestación del servicio por otras personas, y, además, la situación referente a que debía cumplir funciones relacionadas con el objeto misional de la entidad, lo que denota sin lugar a dudas que la accionada, en su condición de empleadora, tenía la posibilidad de disponer del trabajo de la demandante, hecho que demuestra la existencia de una verdadera subordinación.

Aunado a todo anterior, se evidencia que la relación contractual no tuvo carácter temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en que se desarrolló por más de 8 años, aunque con algunas interrupciones las cuales se analizarán más adelante, período en el cual la demandante desplegó las funciones de auxiliar de enfermería de manera uniforme según los objetos contractuales concertados; por consiguiente, se suplió una función permanente o misional de la entidad.”

[Sentencia del 13 de febrero de 2024, M.P: José Miller Lugo Barrero, radicación: 41 001 33 33 007 2019 00028 01](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



Magistrada Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-007-2019-00208-01
Demandante:	Luz Ángela Garzón González
Demandado:	Nación – Ministerio de Defensa Nacional
Fecha:	27 de febrero de 2024

MUERTE EN ACTOS MERITORIOS DEL SERVICIO NO ACREDITADA / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO

Problema Jurídico

“Se contrae a establecer si el acto administrativo del 3 de diciembre de 2018 y el oficio No. S-2019-012446/ARPRE-GROIN -1.10 del 29 de marzo de 2019, por conducto de los cuales se modificó la calificación por muerte del Intendente Jefe Medardo Rivas Fierro, son susceptibles de control judicial; superado lo anterior, determinar si las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales acaeció el deceso del mencionado servidor, deben catalogarse como “muerte en actos meritorios del servicio”.

Extracto

“Dentro del presente asunto, los demandantes pretenden la nulidad de los actos administrativos que modificaron la calificación del deceso del Intendente Jefe Medardo Rivas Fierro de “muerte en actos especiales del servicio” a “muerte en actos del servicio”, situación que no fue reconocida por el juez de primera instancia tras considerar que los actos demandados no resultan enjuiciables y refutada por la parte actora recurrente al considerar que las decisiones demandadas son definitivas y que el fallecimiento del policial antedicho debe catalogarse como “muerte en actos especiales del servicio”. (...)

Atendiendo a lo expuesto, no le asiste razón a la parte apelante cuando sostiene que los actos acusados son definitivos, pues dicha calidad la ostenta la Resolución No. 00627 del 13 de septiembre de 2019 que reconoció la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del causante que no fue demandada en esta oportunidad, sin que con ello se desconozca el precedente invocado en la apelación, pues en la sentencia del Consejo de Estado del 10 junio de 201027 invocada en la alzada, se estudió la legalidad del acto que calificó la muerte de un agente como “simplemente en

actividad”, precisamente porque tal calificación impedía la continuación de la actuación administrativa al no estar contemplada la pensión para los casos en que el deceso es calificado en tal forma (art. 68 Decreto 1091/95), lo cual difiere del presente asunto en que se demanda el acto que recalificó el fallecimiento como “muerte en actos del servicio”, decisión que como se viera, no impidió la continuación de la actuación administrativa (posteriormente se reconoció pensión de sobrevivientes) y en tales términos el pronunciamiento traído por el impugnante no resulta aplicable.

No obstante lo anterior, en gracia de discusión, de aceptarse que los actos demandados resultan enjuiciables, conforme a los medios de convicción obrantes en el plenario no hay lugar a calificar el fallecimiento del Intendente Jefe Medardo Rivas Fierro como “muerte en actos especiales del servicio”, pues como quedara demostrado el 17 de marzo de 2018 siendo las 20:20 horas, el patrullero Duván Humberto Garzón, ingresó a la estación de policía del municipio de Gigante (H) empuñando su arma de dotación y la accionó indiscriminadamente, impactando el brazo izquierdo del patrullero Hubeimar Javier Córdoba y la cabeza del Intendente Jefe Medardo Rivas causándole la muerte, sin estar acreditado que el causante estuviera cumpliendo una misión que pusiera en riesgo su vida e integridad personal, tampoco que el fallecimiento se produjo en mantenimiento o restablecimiento del orden público como lo ha establecido el precedente estudiado inicialmente.

Lo que sí avizora el Tribunal, es que el intendente jefe se encontraba en cumplimiento del deber Constitucional de proteger su propia vida y la de sus subalternos y el hecho de que se hubiera abalanzado sobre el agresor para detener el ataque, no hace que su fallecimiento deba catalogarse como “acto meritorio del servicio”, pues para ello, se insiste, debía estar ejecutando actos meritorios del servicio como encontrarse en combate y ser atacado por el enemigo, y no sólo en actividades de rutina o en “actos del servicio” como aquí se demostró.

Así las cosas, los argumentos de la alzada no están llamados al éxito, pues en consideración a las circunstancias en que acaecieron los hechos hay lugar a calificar el deceso del causante como “muerte en actos del servicio”, tal y como se hiciera en los actos demandados y por ello no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de estos.

Por lo expuesto, el Tribunal revocará la sentencia recurrida en cuanto declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la demanda y se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo, en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda por las razones aquí esgrimidas.”

[Sentencia del 27 de febrero de 2024, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001333300720190020801](#)



Magistrado Ponente:	Ramiro Aponte
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 001 2016 00056 01
Demandante:	Diego Andrés Córdoba Ramírez y Otros
Demandado:	Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Departamento del Huila
Fecha:	23 de enero de 2024

FALLA DEL SERVICIO POR MUERTE DEL AGENTE DE POLICÍA / ATAQUE CONTRA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DESPLAZAMIENTO SIN AUTORIZACIÓN Y SIN ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS

Problema Jurídico

“El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia de primera instancia, y si la muerte del Patrullero Oscar Iván Córdoba Ramírez no es imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional; por tratarse de la concreción de un riesgo propio de la actividad policial, y si el perjuicio se satisface con la indemnización a forfait.”

Extracto

“a.- En el sub lite se encuentra acreditado que el patrullero Oscar Iván Córdoba Ramírez falleció el 1º de julio de 2015, luego de que la camioneta oficial de siglas 23-0096 que conducía en compañía del subteniente Jorge Alzate Patiño (comandante de la estación de Tello), fuera atacada con ráfagas de fusil por un grupo insurgente que los emboscó en el kilómetro 1+ 200 metros de la vía Baraya – Tello.

El informe de necropsia señala que la causa del deceso fue un choque hipovolémico infligido por un proyectil de arma de fuego.

b.- Dicho daño es imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, pero no a título de riesgo excepcional, toda vez que la víctima no fue sometida a un riesgo superior o mayor al que debían afrontar sus demás compañeros, porque la actividad que realizaba era un mero desplazamiento en una camioneta desde la estación de Tello hacia la base del primer distrito de Baraya, con el fin de entregar una documentación.

c.- La Sala considera que el daño es imputable a título de falla del servicio, por las siguientes razones:

i) Previo al ataque perpetrado, en la Policía Nacional se emitieron varias alertas por la situación de orden público; lo cual, se agravó con la ruptura del cese al fuego por parte de las Farc. (...)

ii) En la fecha de los hechos se tenía conocimiento de la injerencia de los frentes 17, 3, 66, 25, 31, 55 y de la columna Teófilo Forero Castro de las Farc en los municipios de Algeciras, Campoalegre, Colombia y Baraya.

iii) También se contaba con informes de inteligencia que daban cuenta de posibles actos terroristas en el departamento por parte de ese grupo guerrillero. (...)

vi) El subteniente Jorge Alzate Patiño era consciente de los riesgos, porque en la “minuta de vigilancia” del 1º de julio de 2015, ordenó extremar al máximo las medidas de seguridad y evitar la rutina en los desplazamientos. Incluso, ese día impartió las siguientes instrucciones: “ojo al plan pistola, ojo al plan granada, ojo con la suplantación de autoridad, franco tiro, no confiarnos de la aparente calma, no deambular solos por el perímetro urbano”. (...)

d.- En tal virtud, es menester colegir que el comandante de la estación de policía de Tello decidió desplazarse sin autorización y sin adoptar las medidas de seguridad requeridas; desconociendo las advertencias y las instrucciones impartidas. Omisión que compromete la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, porque esa conducta negligente favoreció el ataque armado que terminó cegando su propia vida y la del patrullero Oscar Iván Córdoba Ramírez (subalterno); quien conducía la camioneta oficial.

e.- Finalmente, resta por señalar que en el sub lite la reparación del daño es compatible con la indemnización a forfait, ya que los perjuicios no dimanarían de un riesgo propio de la actividad policial sino de una falla del servicio; “evento en el cual surge el derecho a reclamar una indemnización plena y complementaria a la que surge de la esfera prestacional, bajo el régimen general de la responsabilidad de la administración, con las connotaciones propias en relación con los elementos estructurales y las causas extrañas enervantes del fenómeno jurídico”, no obstante, no se impondrá condena por los perjuicios materiales incoados porque fueron negados por el a quo y la parte actora, a quien ello desfavorece, no recurrió la decisión y no se puede hacer más gravosa la situación del apelante único.

f.- Merced a lo anterior, la Sala confirmará por las razones expuestas el fallo impugnado.”

[Sentencia del 23 de enero de 2024, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41001333300120160005601](#)



Magistrado Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-008-2017-00288-01
Demandante:	Yizeth Carolina Perea Medina y Otros
Demandado:	Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Otro
Fecha:	23 de enero de 2024

LESIONES PERSONALES POR ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS / AUSENCIA DE FALLA DEL SERVICIO / INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES NO PROBADAS

Problema Jurídico

“Como el a quo accedió a las pretensiones de la demanda y las entidades demandadas se oponen a tal decisión, la Sala procederá a resolver ¿si el MUNICIPIO DE EL PLATA y la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, son responsables administrativa y patrimonialmente de los daños que reclaman los demandantes -lesiones físicas- ocasionadas el 28 de junio de 2015 por la explosión de elementos pirotécnicos, cuando se encontraban en el parque principal del municipio de la Plata – Huila, siendo espectadores del desfile del Festival Folclórico y Sampedrino?

TESIS DE LA SALA

Se revocará la sentencia recurrida y se negarán las pretensiones de los actores, debido a que, si bien se produjo un daño a los demandantes, no se demostró que el mismo fue consecuencia de alguna actuación u omisión del municipio de la Plata o de la Policía Nacional, en tanto no se probó que hubieren incumplido con sus obligaciones constitucionales y legales que fueran determinantes en la causación del daño a los demandantes.

Asimismo, no es posible imputar tal daño a las entidades demandadas, teniendo en cuenta que se rompió el nexo causal entre el siniestro y la actuación de las demandadas, esto es, por presentarse la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero, pues se demostró que el daño aludido ocurrió como consecuencia de la acción - imprudente o intencional- de una persona -sin determinar quién- que haciendo uso de la pólvora, cuyo uso estaba prohibido y restringido por la autoridad municipal, lesionó físicamente a los actores.”

Extracto

“Es claro que la doctrina ha indicado que el incumplimiento de las obligaciones de prevención, vigilancia y control establecidas en la normatividad aplicable no es la única omisión capaz de comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos en fiestas populares. También la falta de una adecuada y completa reglamentación que reduzca los riesgos asociados a la realización del festejo, puede conducir al mismo resultado.

Sin embargo, en el caso examinado y según el material probatorio obrante en el expediente, lo que queda claro es que la máxima autoridad municipal adoptó las medidas pertinentes de prohibición de distribución, venta y uso de la pólvora y que la Policía de dicha localidad efectuó los controles y dispuso de los mecanismos de vigilancia y cumplimiento propios de sus funciones de prevención en aras de salvaguardar y velar por la seguridad de sus ciudadanos, por lo que para esta Sala, desde esta perspectiva, no existen fallas por omisión en los deberes de prevención, control y vigilancia de los riesgos asociados a la celebración de fiestas populares y espectáculos públicos.

Contrario sensu y sin que sea necesario abordar tal estudio, lo que se advierte es que en el sub lite el daño tuvo origen en el hecho exclusivo y determinante de un tercero, que definitivamente rompe cualquier relación de causalidad entre ese daño y la actuación de las entidades demandadas. (...)

De esta manera, conforme a lo probado, si bien en este caso no existe certeza de la persona que hizo uso de la pólvora y tampoco se estableció ni se logró determinar con exactitud el lugar desde donde se lanzó tal elemento explosivo; es claro que ese actuar, que estaba prohibido y/o restringido y que además no puede calificarse si fue intencional, doloso o culposo; fue el determinante y excluyente del daño -lesiones personales- que sufrieron los demandantes, en el entendido que tanto la entidad municipal como la autoridad de policía no tuvieron participación alguna, pues en lo que les concierne, esto es, en cuanto al control y mantenimiento del orden público y la adopción de medidas pertinentes y razonadas para realizar el evento público, se demostró que dieron cumplimiento a los mismos y se ajustaron a la constitución y la ley y demás normas reglamentarias y por lo que, contrario a lo expuesto por el a quo, no hay lugar a declarar responsabilidad en contra de las mismas.”

[Sentencia del 23 de enero de 2024, M.P: José Miller Lugo Barrero, radicación: 41001333300820170028801](#)



Magistrado Ponente:	Enrique Dussán Cabrera
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 004 2015 00282 01
Demandante:	Dennis Guzmán Mazorra
Demandado:	Municipio de Isnos y Otro
Fecha:	06 de febrero de 2024

DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA SIN SEÑALIZACIÓN / LESIONES POR CAÍDA / CONCURRENCIA DE CULPAS

Problema Jurídico

“Conforme la apelación de la parte actora y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si las entidades demandadas son responsables por las lesiones causadas a Denis Guzmán Mazorra en hechos ocurridos el 18 de abril de 2013, cuando se cayó producto de una zanja que se encontraba abiertas sin señalización o de un muro u obstáculo que la hizo caer, en una zona que no contaba con el servicio de alumbrado público.”

Extracto

“Se tiene, por tanto, que los municipios pueden prestar directamente el servicio de alumbrado público o mediante la celebración de convenios o contratos con ese objeto¹², lo que no significa que se desliguen totalmente de las responsabilidades inherentes al cumplimiento de la obligación consagrada en la Constitución y la ley, así como las consecuencias derivadas de su desatención.

Por otro lado, se encuentra probado y no existe discusión en esta instancia, que en el lugar en que se cayó la señora Denis Guzmán, se estaban desarrollando obras de ampliación de la red de gasificación por parte de la Empresa Surcolombiana de Gas SA ESP Surgas SA ESP en cooperación con la comunidad, lo que, como advirtió el a quo, no exonera de responsabilidad a las entidades demandadas. (...)

El anterior análisis conlleva a concluir que efectivamente se encuentra probado que la caída de la señora Dennis Guzmán se causó con ocasión de la zanja que se encontraba abierta, y con independencia que la misma hubiese sido excavada por la comunidad, y que la obra se haya adelantado sin las licencias correspondientes por parte del Surgas, esto de ninguna manera los exime de responsabilidad, pues está ampliamente probado el incumplimiento o desconocimiento de las obligaciones

legales por parte de las demandadas, como lo expuso ampliamente el a-quo, y no fue objeto de controversia en esta instancia.

No obstante lo anterior, la Sala considera que esta responsabilidad debe ser compartida con la parte actora, como quiera que esta contribuyó en la causación del daño.

Efectivamente, las obras que se estaban realizando en el municipio, con independencia de si contaban con las autorizaciones y licencias por parte del ente territorial o si estaban o no señalizadas, eran notorias para todos los habitantes del municipio, máxime si la señora Denis Guzmán residía a una cuadra y media del sitio del accidente, como lo señalaron los testigos, además que dichas obras llevaban realizándose varios días, incluso afirman que las obras se estaban realizando desde aproximadamente un mes atrás, por lo que la señora Denis Guzmán debía conocer que sobre esa calle, y específicamente sobre ese andén, se encontraban realizando obras que implicaban la abertura de zanjas o huecos en el andén, y en consecuencia debía circular con precaución y prudencias por esa zona.

Así las cosas, al conocer el estado de los andenes del municipio, conocía el riesgo que representaba transitar por la misma, lo que, si bien no supone una atribución exclusiva de la responsabilidad a la demandante, si atenúa la responsabilidad de las demandadas, en un 50%, y por tanto se encuentra configurado la concurrencia de culpas en la causación del daño.

Bajo esta línea de razonamiento, se revocará la sentencia proferida en primera instancia, y en su lugar se declarará la responsabilidad solidaria de las entidades demandadas, a título de falla del servicio, disminuida en un 50% por configurarse la concurrencia de culpas, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de las lesiones que padeció la señora Dennis Guzmán Mazorra en la caída que sufrió en una zanja que se encontraba abierta en un andén del municipio de Isnos, mientras se adelantaba una obra de ampliación de la red de gas domiciliario por parte de Surgas SA ESP, sin la respectiva señalización ni la existencia de alumbrado público.”

[Sentencia del 06 de febrero de 2024, M.P: Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41001333300420150028201](#)



Magistrado Ponente:	Enrique Dussán Cabrera
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 004 2016 00096 01
Demandante:	Lina María Trujillo Gutiérrez y otros
Demandado:	Departamento del Huila
Fecha:	06 de febrero de 2024

ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR HUECO EN LA VÍA PÚBLICA / CONCURRENCIA DE CULPAS

Problema Jurídico

“Conforme la apelación del ente territorial y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si se revoca la sentencia de septiembre 25 de 2018, y en consecuencia se debe establecer si el Departamento del Huila es responsable o no por el daño antijurídico padecido por los demandantes, específicamente si se encuentra probada que la causa eficiente del accidente de tránsito fue un hueco en la vía pública por la que transitaba los señores Oscar Fabián Polanco Polanía y la señora María del Pilar Mejía Trujillo.

En caso de confirmarse la sentencia, si la entidad demandada es responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia del fallecimiento de la señora María del Pilar Mejía Trujillo en el accidente de tránsito ocurrido el 25 de mayo de 2015, en un accidente de tránsito en el kilómetro 5 de la vía Yaguará-casco urbano a la ciudad de Neiva, o si por el contrario se encuentra probada la causal eximente de responsabilidad denominada “Hecho exclusivo de un tercero”.

Extracto

“Se encuentra ampliamente probado que la vía en la que ocurrió el accidente, se encontraba en muy mal estado, y que pese a las diferentes intervenciones por parte del gobierno departamental y municipal, así como de la señalización de “PELIGRO ZONA INESTABLE EN ESTUDIO”, se encontraba con huecos, arena y escombros, como lo refieren los testigos Willington Escobar Lizcano, y Oscar Fabián Polanco Polanía, y se desprende de las fotografías aportadas en la demanda, las cuales fueron tomadas 5 días después del accidente por el señor Escobar Lizcano quien las ratificó, evidenciándose un incumplimiento por parte del departamento del Huila de su obligación legal de realizar el mantenimiento de las vías que se encuentran en su jurisdicción, contenida en el numeral 1.1. del artículo 4 de la Ley 2200 de 2022 y el artículo 115 de la ley 769 de 2002, más aún si se tiene conocimiento de que es una zona inestable como así lo muestra la señalización, su mantenimiento debe ser permanente y con correcciones definitivas, pues como lo señaló el juez de instancia,

esos avisos correspondían al desarrollo del Contrato No. 1687 de 200830, sin evidenciarse en los mismos, una actualización o mantenimiento de las señales viales de peligro, y más aún sin una solución concluyente después de 7 años de su instalación en la malla vial. (...)

Si bien, la actividad de la conducción, como actividad peligrosa, exige el cumplimiento del deber objetivo de cuidado del conductor, es decir, acatar las normas de tránsito y conducir con prudencia y diligencia, no puede utilizarse este argumento para atribuir exclusivamente la responsabilidad del accidente al señor Oscar Fabián Polanco Polanía como lo pretende hacer la entidad en el recurso, pues ello sería tanto como justificar la omisión del ente territorial y admitir que este continúe incumpliendo su obligación legal, como quiera que aun cuando en virtud de ello se causen lesiones a los administrados, la responsabilidad sería únicamente de estos últimos por no conducir con la prudencia para esquivar el mal estado de la vía y evitar caer en un hueco o defecto de la vía que lo lesione.

El que los testigos afirmen que por el deterioro de la vía solo se podía conducir a 60km/h para no caerse, no le imponen una carga al conductor que pueda exigírsele jurídicamente en el ejercicio de esta actividad peligrosa, y por el contrario corresponde a una medida de precaución de los conductores en salvaguarda de su propia integridad, que corrobora aún más que se le está trasladando al transeúnte la seguridad de la vía, cuando mantener esta seguridad recae en el Estado con el mantenimiento de las vías como obligación legal.

Conforme lo expuesto, considera la Sala que debe atribuirse la responsabilidad compartida de la parte demandante, como quiera que existen circunstancias que atenúan la responsabilidad de la demandada, como el mismo hecho de conocer la vía por ser la que utilizaba regularmente para acudir a su trabajo y que llevaba realizando por periodo prolongado, que si bien no supone una atribución exclusiva de la responsabilidad a la demandante, si aminora la responsabilidad del Estado porque al conocer la vía también conocía el riesgo que representaba transitar por la misma y en consecuencia debía tomar mayores medidas de precaución y prudencia a la hora de conducir.

Bajo esta línea de razonamiento, la Sala encuentra acreditada la imputación material y jurídica del daño padecido por la señora María del Pilar Mejía Trujillo y el señor Oscar Fabián Polanco Polanía al departamento del Huila, disminuido en un 50% en razón a la concurrencia de culpas entre este y los demandantes.

[Sentencia del 06 de febrero de 2024, M.P: Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41001333300420160009601](#)



Magistrado Ponente:	Ramiro Aponte Pino
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 006 2015 00120 03
Demandante:	Piedad Mossos Pascuas y Otros
Demandado:	E.S.E. Hospital Perpetuo Socorro de Villavieja y Otros
Fecha:	13 de febrero de 2024

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / INEFICACIA EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS / PÉRDIDA ANATÓMICA

Problema Jurídico

“El sublite se contrae a establecer si la ESE Hospital Perpetuo Socorro de Villavieja es administrativa y extracontractualmente responsable de la pérdida anatómica sufrida por el señor José Edinson Olaya Mossos (extirpación del testículo izquierdo), y si se configuró la pérdida de la oportunidad.

En caso afirmativo, determinar si se debe incrementar el monto del daño moral y condenar a dicho hospital por daño a la salud o a la vida de relación, y por concepto de costas.

Así mismo, precisar si la indemnización a cargo de la aseguradora llamada en garantía afecta el contrato de seguro 1002931-4, y si con dicho propósito se debe modificar la sentencia impugnada.”

Extracto

“Tomando como marco de reflexión el anterior precedente jurisprudencial y los hechos probados, considera la Sala, que por las siguientes razones el Hospital Perpetuo Socorro de Villavieja incurrió en una falla del servicio y coartó la oportunidad de que el paciente pudiera preservar el órgano que posteriormente resultó afectado:

a.- A pesar de que el menor José Edinson fue diagnosticado con torsión testicular (el 9 de marzo de 2013), y a pesar de que el galeno de turno advirtió la “horizontalización del testículo izquierdo, aparición de náuseas con vómito, escalofríos sin fiebre”; omitió remitirlo inmediatamente a un centro de mayor complejidad. Conducta que

debió seguir, porque como lo ilustrara el urólogo Cubillos en su testimonio; si bien es cierto que no era una urgencia vital, sí era una emergencia quirúrgica. Sin embargo, fue dado de alta con analgésicos.

(...)

f.- Lo anterior permite colegir que en el centro médico de primer nivel el paciente no recibió una atención oportuna y acorde con la lex artis; porque desde el primer momento en que se advirtieron los síntomas de una torsión testicular (el 9 de marzo de 2013), se debió remitir a un centro médico de mayor nivel; lo cual, ocurrió cuatro días después. Omisión que tampoco se puede justificar por los trámites administrativos derivados del traslado y el posterior retiro voluntario.

g.- Si bien es cierto que en el momento del ingreso (9 de marzo), solo presentaba dolor testicular (por eso se registró que no presentaba "...signos de torsión testicular"); también lo es, que estando en observación se apreció la horizontalización del testículo, náuseas, vómitos y escalofríos sin fiebre. Síntomas que le permitieron al galeno arribar al acertado diagnóstico de torsión testicular.

Como ya se indicara, el médico se limitó a aplicar una detorsión manual; omitiendo la remisión y descociendo que se trataba de una urgencia quirúrgica. Y como ya se anotara, autorizó el egreso con manejo de analgésicos.

h.- De acuerdo con la jurisprudencia citada líneas atrás, en el sub lite se configura la denominada pérdida de oportunidad, porque en el evento de que el actor se hubiera trasladado oportunamente al hospital de Neiva, habría tenido el chance de preservar el testículo izquierdo. Oportunidad que no es puramente eventual, porque la literatura médica enseña que si el paciente se interviene dentro de las 6, 12 o 24 horas siguientes, existen posibilidades de éxito (afirmación que también encuentra respaldo en el testimonio del doctor Jorge Cubillos Gutiérrez)"

[Sentencia del 13 de septiembre de 2024, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41 001 33 33 006 2015 00120 03](#)



Magistrado Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001333300420140062901
Demandante:	Erika Tatiana Lizcano Argote y Otros
Demandado:	Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Fecha:	13 de febrero de 2024

ALLANAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / INEXISTENCIA DE LA CULPA DE LA VÍCTIMA

Problema Jurídico

- i) ¿Debe revocarse la decisión de primer grado, porque no se demostró que el disparo que causó la lesión a la señora Erika Tatiana Lizcano Argote en procedimiento policial realizado el 19 de julio de 2012, provino de arma de dotación oficial?registro
- ii) ¿Contribuyó el obrar de la lesionada, en la producción de las lesiones que se le causaron durante el operativo policial que se erija en culpa exclusiva de la víctima?

La tesis del Tribunal es que se debe confirmar la decisión recurrida porque se configuró la responsabilidad estatal por riesgo excepcional, en la medida que la señora Erika Tatiana Lizcano Argote resultó lesionada con arma de fuego de dotación oficial en medio de un operativo policial y su conducta no contribuyó a la causalidad del daño. Para sustentar lo anterior, se analizarán los requisitos para erigir la responsabilidad patrimonial del Estado a la luz de los hechos probados.”

Extracto

“En este punto se ubica concretamente el reparo formulado en la apelación, al señalar que no se configuró la responsabilidad estatal por riesgo excepcional y por tanto el daño antijurídico establecido, no le es imputable, pues además la a quo no encontró probada la falla del servicio y este punto tampoco fue tema del recurso.

En síntesis, el recurso pretende derruir la afirmación de la a quo quien indicó que la causa del daño antijurídico es atribuible a la demandada, en razón a que Erika Tatiana resultó lesionada por arma de dotación oficial y el operativo policial dentro del que ello ocurrió no iba dirigido en su contra.

Así pues, encuentra la Sala que en la diligencia de registro y allanamiento realizada el 19 de julio de 2012 en la vivienda ubicada en la carrera 28 N° 6 sur-09 de Neiva, con ocasión de la noticia criminal 410016000716201201372, tenía como objetivo la materialización de la orden de captura contra Yuberney Cambo Delgado y la recolección de evidencia física y de material probatorio.

En dicho operativo se produjo el intercambio de disparos entre Yuberney Cambo Delgado y los Policiales que intervinieron en él, con el desafortunado resultado de la muerte del patrullero Cristian Ortiz Ortiz y la lesión de la demandante Erika Tatiana Lizcano Argote, quien se encontraba al interior de su vivienda, hechos que se desprenden del informe ejecutivo de la misma fecha, suscrito por el intendente José Arnulfo Quiroga Bonilla (f. 574 a 578, C. 3).

En el historial médico de Erika Tatiana Lizcano Argote que fue aportado con la demanda, se indicó que la herida por la cual ingresó a urgencias del Hospital Universitario de Neiva el 19 de julio de 2012 era compatible con trauma craneoencefálico penetrante por arma de fuego. (....)

Finalmente, ningún reproche se hizo frente al comportamiento de la lesionada ni se desprende de las pruebas que su conducta haya contribuido en la producción del daño irrogado, de hecho, el registro y allanamiento en su vivienda no iba dirigido en su contra pues el destinatario del mismo era Yuberney Chambo Delgado y no hay prueba que insinúe siquiera que dicha señora también disparó a los policiales y por tanto debía asumir las consecuencias de su conducta.

Nótese que el ataque efectuado por Yuberney Chambo Delgado dio lugar al contrataque de la autoridad, obrando en legítima defensa y más cuando un policial resultó herido, lo cual implica que su comportamiento resultó adecuado, pero ello causó un riesgo mayor que entraña el uso de armas de fuego por la fuerza pública y derivó en la lesión conocida, por lo que el título de imputación que hizo el a quo estuvo acorde con lo probado. (...)

En consecuencia, como el daño antijurídico causado es atribuible por daño especial a la entidad demandada y existe una relación de causa a efecto entre dicho daño y tal imputabilidad, se cumplieron los requisitos para declarar la responsabilidad de la demandada e imponerle la condena de repararlo, por ello se debe confirmar el fallo apelado.”

[Sentencia del 13 de febrero de 2024, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001333300420140062901](#)



Magistrado Ponente:	Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001333300420140090701
Demandante:	Diana Marcela González Correa
Demandado:	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Fecha:	27 de febrero de 2024

DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / LESIONES A GUÍA DURANTE OPERATIVO MILITAR

Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación incoado por la parte demandada contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual deberá determinar si las pruebas allegadas permiten atribuir a la entidad demandada la responsabilidad de reparar los daños caARusados - lesiones sufridas por DIANA MARCELA GONZALEZ CORREA- como consecuencia del disparo recibido en su humanidad el 17 de noviembre de 2012, cuando se trasladaba en un vehículo de propiedad del Ejército Nacional a quien prestaba su colaboración como guía durante un operativo militar, bajo la tesis del riesgo excepcional como lo determinó el a quo si, por el contrario, se configuró el eximente de responsabilidad del caso fortuito como lo alega la accionada.

De encontrarse acreditada la responsabilidad, se deberá verificar si la tasación de perjuicios realizada por el a quo por concepto de daños a la vida de relación se encuentra ajustada o, por el contrario, hay lugar a disminuir los valores reconocidos como lo solicitó la accionada.”

Extracto

“De acuerdo con lo expuesto, no existen dudas de que Diana Marcela González Correa, quien era desplazada por la violencia, fue herida por un proyectil de arma de fuego cuando se encontraba al interior de la cabina de una camioneta de propiedad del Ejército Nacional, lo que le ocasionó un trauma raquimedular, paraplejia espástica, vejiga e intestino neurogénicos y cicatriz deformante interés capular, las cuales le causaron un porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral estimada en un 78,35%.

Asimismo, que el proyectil provino de uno de los fusiles que se encontraban en el platón del vehículo, armas de dotación oficial que había sido asignadas a los soldados

Marlio, Aguirre Noscue José Ferney, Silva Ramírez Fabio y Charry Gutiérrez Diógenes.

Que los mencionados uniformados, en el momento de los hechos, se encontraban en desarrollo de un operativo militar, en cumplimiento de la Orden de operaciones táctica Nodriz fragmentaria Nobleza.

Que las mencionadas armas, por orden del comandante del operativo, se hallaban cargadas y sin el seguro respectivo, ante un inminente riesgo de agresión del enemigo.

Que la presencia de la lesionada en dicho vehículo, durante el desarrollo de un operativo militar, obedeció a que esta, ocasionalmente, prestaba colaboración voluntaria como guía a los miembros de la mencionada institución, a cambio de ayudas económicas representadas en cánones de arrendamiento.

Con base en lo anterior, se concluye que el daño antijurídico sufrido por DIANA MARCELA CORREA es imputable al estado, ya que se encuentra demostrado el nexo de causalidad material consistente en una herida causada con un arma de dotación oficial durante el desarrollo de una actividad propia del servicio, lo que lleva a emplear el régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de imputación denominado riesgo excepcional para la solución del caso.

Resalta la Sala que si bien en el presente asunto se encuentran demostradas dos circunstancias que permiten encuadrar la responsabilidad de la entidad demandada a título de riesgo excepcional, estas son, que el daño fue ocasionado a una civil que prestaba ayuda ocasional a las fuerzas militares y como consecuencia del desarrollo de una actividad peligrosa como lo es el uso de armas de fuego, para la Sala es esta última circunstancia la determinante en la producción de daño. (...)

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera que declaró responsable al Ejército Nacional de los daños causados a la señora DIANA MARCELA GONZÁLEZ CORREA, a título de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, ya sea por la decisión de aceptar la colaboración de una civil durante un operativo militar que resultó lesionada durante el desarrollo del mismo, ya sea por el hecho de que la lesión fue causada con un arma de dotación oficial de la misma institución.”

[Sentencia del 27 de febrero de 2024, M.P: Gerardo Iván Muñoz Hermida, radicación: 41001333300420140090701](#)

NOTA

La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado con los textos originales ubicados en la Secretaría del **Tribunal Administrativo del Huila**, o en el [aplicativo SAMAI](#).